

**SRE-PSD-404/2015**

**PROMOVENTE:** JOSÉ DEL PILAR CÓRDOBA HERNÁNDEZ.

**PARTES SEÑALADAS:** GRUPO RAMEH (PERIÓDICO TABASCO AL DÍA).

**MAGISTRADO PONENTE:** FELIPE DE LA MATA PIZAÑA.

**INDICE**

**I. ANTECEDENTES**

1. Presentación de la queja	2
2. Radicación y admisión	2
3. Medidas cautelares	2
4. Admisión	2
5. Audiencia	2
6. Cierre de instrucción	2
7. Trámite ante Sala Regional Especializada	2

**CONSIDERACIONES**

II. Competencia	3
III. Causal de improcedencia	3
IV. Estudio de fondo	4
1. Planteamiento de la controversia	4
2. Acreditación de los hechos denunciados	5
3. Valor probatorio	6
4. Análisis de fondo	11
5. Normativa aplicable	12
6. Marco convencional	15
7. Caso concreto	24

**RESOLUTIVO**

Único

29



**PROCEDIMIENTO ESPECIAL  
SANCIONADOR**

**EXPEDIENTE:** SRE-PSD-404/2015

**PROMOVENTE:** JOSÉ DEL PILAR  
CÓRDOBA HERNÁNDEZ

**PARTES SEÑALADAS:** GRUPO RAMEH  
(PERIÓDICO TABASCO AL DÍA)

**MAGISTRADO PONENTE:** FELIPE DE LA  
MATA PIZAÑA

**SECRETARIOS:** OSIRIS VÁZQUEZ RANGEL  
Y MARÍA EUGENIA PAZARÁN ANGUIANO

México, Distrito Federal, a diecisiete de junio de dos mil quince.

**Sentencia** que establece la **inexistencia** de la conducta consistente en la realización de calumnia por parte Grupo RAMEH (periódico Tabasco al día) en contra de José del Pilar Córdoba Hernández, con motivo del procedimiento especial sancionador tramitado ante el Instituto Nacional Electoral, con la clave JD/PE/PRI/JD06/TAB/PEF/2/2015.

**GLOSARIO**

<b>Constitución Federal:</b>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
<b>INE:</b>	Instituto Nacional Electoral.
<b>Ley Electoral:</b>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
<b>Ley Orgánica:</b>	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
<b>Sala Superior:</b>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
<b>Sala Especializada:</b>	Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
<b>Unidad Especializada</b>	Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores de la Sala Regional

	Especializada.
<b>Autoridad instructora:</b>	6 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tabasco.
<b>Promovente:</b>	José del Pilar Córdoba Hernández (Candidato a diputado federal por el 06 Distrito Electoral Federal en el Estado de Tabasco del Partido Revolucionario Institucional).
<b>Parte Señalada:</b>	Grupo RAMEH (Periódico Tabasco al Día)

#### **I. ANTECEDENTES.**

**1. Presentación de la queja.** El veintiocho de mayo de dos mil quince, José del Pilar Córdoba Hernández, por propio derecho, presentó escrito de queja en contra de Grupo RAMEH (Periódico Tabasco al día) , por la presunta publicación en primera plana de propaganda calumniosa, en detrimento a su candidatura, solicitando el dictado de medidas cautelares.

**2. Radicación y admisión.** El treinta de mayo de dos mil quince, la autoridad instructora radicó y admitió la queja con el número de expediente JD/PE/PRI/JD06/TAB/PEF/2/2015.

**3. Medidas cautelares.** El dos de junio de dos mil quince, el 06 Consejo Distrital del INE en el Estado de Tabasco, declaró improcedentes las medidas solicitadas.

**4. Admisión.** El mismo dos de junio de dos mil quince, se admitió a trámite la queja.

**5. Emplazamiento.** En la misma fecha, la autoridad instructora ordenó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos.

**6. Audiencia.** El cinco de junio siguiente, se llevó a cabo la correspondiente audiencia.

**7. Cierre de instrucción y remisión a la Unidad Especializada.** Concluida la audiencia de pruebas y alegatos, la autoridad instructora cerró la instrucción, ordenó la elaboración del informe respectivo y la remisión del expediente a la Unidad Especializada.

**8. Trámite ante Sala Especializada.**

El quince de junio de dos mil quince, se turnó el expediente con el número indicado al rubro al Magistrado Ponente.

Una vez verificados los requisitos de ley, así como la debida integración del expediente, y sin existir diligencias pendientes de realizar, se elaboró el proyecto de resolución correspondiente.

**II. Competencia.**

Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, en virtud de que se trata de la resolución de un procedimiento especial sancionador relativo a la presunta difusión de propaganda calumniosa en detrimento de José del Pilar Córdoba Hernández (Candidato a diputado federal por el PRI en el 06 Distrito Electoral Federal en el Estado de Tabasco).

Lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 195, fracción XIV de la Ley Orgánica; 1, párrafo primero y 470 a 477 de la Ley Electoral.

**III. Causal de improcedencia.**

Del escrito presentado por la parte señalada, así como de su comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos, se advierte que hace valer la causal de

improcedencia relativa a la **frivolidad**, al considerar que no se aportan pruebas idóneas para acreditar la supuesta conducta denunciada.

Cabe precisar que el artículo 471, párrafo quinto, inciso d), de la Ley Electoral, establece que se desechará de plano la denuncia cuando sea evidentemente frívola, entendiendo por ello, que la queja se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia.

Al respecto, se advierte que la denuncia sí está sustentada en medios de prueba, lo cual debe ser materia de análisis en el fondo del presente asunto, por lo que, con independencia de que los planteamientos del quejoso puedan ser o no fundados, no puede emitirse un pronunciamiento previo al respecto, toda vez que ello será motivo de análisis en el estudio de fondo de la presente ejecutoria.

En ese sentido, resulta orientadora la jurisprudencia de la Sala Superior 20/2009 con el rubro PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO<sup>1</sup>, en la cual se sostiene que la autoridad no puede desechar la queja cuando se requiera realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos, a partir de la ponderación de los elementos que rodean las conductas denunciadas y de la interpretación de la ley supuestamente inobservada.

#### **IV. Estudio de Fondo.**

##### **1. Planteamiento de la controversia.**

---

<sup>1</sup> Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: [www.te.gob.mx](http://www.te.gob.mx).

En su escrito de queja, la promovente hizo valer hechos que constituyen la materia de controversia, como a continuación se indican:

CONDUCTAS SEÑALADAS	PARTE SEÑALADA	HIPÓTESIS JURÍDICA
<p>Realización de actos que supuestamente <b>calumnian</b> al promovente, a través de la publicación en su titular en primera plana del viernes 1° de mayo de dos mil quince, edición 7522 en la que se lee:</p> <p><b>“PILAR CÓRDOBA TERRORISTA”</b></p> <p>-El hoy candidato del PRI acusó de agitadores a trabajadores y en contubernio con el TSJ maquillaron las demandas.</p> <p>-Petroleros acusan al poder judicial de proteger a cacique petrolero</p> <p>-Tienen amenazados a los sindicalizados, si no votan por él.”</p> <p>Publicación en su titular en primera plana del cinco de mayo de dos mil quince en la que se lee:</p> <p><b>PILAR CÓRDOBA “MAPACHE MAYOR”</b></p> <p>-Está comprando votos para regalar despensas, machetes, láminas y molinos, denuncia panista</p> <p>-Pide el INE revisar las cuentas del abanderado priísta y aplicarle la ley.</p>	<p>Grupo RAMEH (Periódico Tabasco al Día)</p>	<p>Artículo 41, Base, III, Apartado C, párrafo primero, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 247, párrafo 2 y 471, párrafo 2, de la Ley Electoral.</p>

Esta Sala Especializada se constreñirá a estudiar la Litis planteada, esto es, si grupo RAMEH (Periódico Tabasco al Día), si por la publicación de los encabezados de las notas referidas, calumnia a José del pilar Córdoba Hernández.

2. Acreditación de los hechos denunciados.

Esta Sala Especializada, de un análisis del caudal probatorio existen las publicaciones de las siguientes notas periodísticas, encabezadas como:

**a)** “Pilar Córdoba mapache mayor”, firmada por el periodista L. Sandoval Frade el cinco de mayo de dos mil quince, en el diario TABASCO AL DÍA, y

**b)** “Pilar Córdoba terrorista”, firmada por el periodista Juan Diego Morales Arias, el uno de mayo de dos mil quince, en el diario TABASCO AL DÍA.

Lo anterior, en razón del análisis y valoración de los siguientes elementos probatorios:

**a. Documental pública.**

**Acta Circunstanciada** de treinta y uno de mayo de dos mil quince, mediante la cual se indica se verificó la página WEB [www.tabascoaldia.com.mx](http://www.tabascoaldia.com.mx), respecto de la publicación del día cinco de mayo de dos mil quince, “mapache mayor”, en primera plana de dicha edición, no pudiendo corroborar en la referida página web la información del día primero de mayo.

**b. Documentales privadas.**

- Un ejemplar del diario TABASCO AL DIA, correspondiente a la edición 7522, del uno de mayo.
- Impresión de la primera plana del diario TABASCO AL DIA, correspondiente a la edición 7524, del cinco de mayo.
- Fotografía, en la que se aprecia un puesto de periódicos exhibiendo diarios, entre los que está “TABASCO AL DÍA” con el encabezado “Pilar Córdoba terrorista”.

**3. Valoración Probatoria.**

Las citadas **documentales públicas** al ser instrumentadas por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones se considera como documental pública en



términos del artículo 462, párrafo 2 de la Ley Electoral y, tienen valor probatorio pleno respecto de la existencia de doce carteles, lo anterior, al ser emitidas por un Notario Público y por un servidor públicos del INE en ejercicio de sus facultades, respectivamente.

Por lo que se refiere a las **documentales privadas**, sólo alcanzan valor probatorio pleno, como resultado de su adminiculación con otros elementos de autos, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, cuando de la relación que guardan entre sí generen convicción.

En ese sentido, del análisis de las pruebas enunciadas previamente, adminiculadas con las manifestaciones vertidas, **se acredita:**

**La existencia de la publicación de la nota periodística “Pilar Córdoba terrorista”, firmada por el periodista Juan Diego Morales Arias, el uno de mayo de dos mil quince, en el diario TABASCO AL DÍA.**

Lo anterior, en atención a que se ofreció la documental privada consistente en un ejemplar del diario TABASCO AL DIA, correspondiente a la edición 7522, del uno de mayo, documental que es coincidente con la imagen fotográfica ofrecida por el promovente en la que se aprecia un puesto de periódicos exhibiendo diarios, entre los que está “TABASCO AL DÍA” con el encabezado “Pilar Córdoba terrorista” y la inspección realizada por la autoridad instructora a la página WEB, [www.tabascoaldia.com.mx](http://www.tabascoaldia.com.mx), del día uno de mayo de dos mil quince, lo cual, al constar en el acta de treinta y uno de mayo de junio del presente año, y hace prueba plena al tratarse de una documental pública.

El contenido de la nota periodística es el siguiente:

En primera plana.

“Pilar Córdoba

Terrorista

\*El hoy candidato del PRI acusó de agitadores a trabajadores y en contubernio con el TSJ maquillaron las demandas.

\*Petroteros acusan al Poder Judicial de proteger al cacique petrolero

\* Tiene amenazados a los sindicalizados, si no votan por él"

En la página tres.

"El hoy candidato del PRI a diputado Federal acusó de agitadores a trabajadores y en contubernio con el TSJ maquillaron las Demandas

Juan Diego Morales Arias.

Los ex candidatos a la Secretaría General de la Sección 44 acusan a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia, de no ejercer la justicia en torno a la reconstrucción de hechos solicitada desde hace tres años aproximadamente para demostrar la inocencia por las acusaciones que les hizo **el ahora diputado José del Pilar Córdoba Hernández**.

Ayer al acudir al juzgado tercero penal los demandados Manuel Camacho Medina, Gerardo Guzmán Perera, y Alfredo González, señalaron que el motivo de acudir al recinto judicial fue para conocer el desenlace del proceso penal 29/2005 en que fueron demandados por José del Pilar Córdoba Hernández, Javier Padilla Higareda, José de Jesús Zamudio Aguilera y demás secuaces.

Estas personas, entre ellos **el diputado Pilar Córdoba**, cuando se dieron las elecciones para el cambio de administración, estos acusaron a los demandados por delitos al parecer inventados: explosivos de armas de terrorista, peligro a la seguridad colectiva, lesiones y daños al edificio de la sección 44.

Esto fue inventado después de dos años que se dieron las elecciones, fue cuando maquillaron dicha demanda, y por tal motivo los demandados estuvieron presos durante ocho días y pagaron una fianza de 122,500 pesos para obtener su libertad.

Los quejosos Manuel Camacho Medina, Gerardo Guzmán Perera, y Alfredo González, argumentan que donde queda la justicia si los mencionados nunca se presentaron a ratificar dichas acusaciones sobre todo por los delitos que les inventaron, y hasta la presente fecha son ya ocho veces que no se presentaron para llevar a cabo la reconstrucción de hechos y desenlazar dichas acusaciones.

Sin embargo Pilar Córdoba, Jesús Zamudio, estas personas vienen reeligiéndose desde hace doce años entre ellos mismos, y los sindicalizados ya no lanzan su convocatoria puesto que les tienen miedo a que también les inventen delitos y caigan al reclusorio."

De la nota se desprende, respecto del promovente, lo siguiente:

- El encabezado de la nota dice: “Pilar Córdoba Terrorista”.
- La nota es firmada por Juan Diego Morales Arias.
- Se dice que trabajadores petroleros, ex candidatos a la Secretaría General de la Sección 44, fueron acusados por el promovente, entre otros, “por delitos al parecer inventados: explosivos de armas de terrorista, peligro a la seguridad colectiva, lesiones y daños al edificio de la sección 44”.
- Que el promovente y Jesús Zamudio se están reeligiendo desde hace doce años entre ellos mismos, y los sindicalizados ya no lanzan su convocatoria puesto que les tienen miedo a que también les inventen delitos.
- Que el promovente al momento de los hechos referidos, contaba con la calidad de diputado.

**La existencia de la publicación de la nota periodística “Pilar Córdoba mapache mayor”, firmada por el periodista L. Sandoval Frade el cinco de mayo de dos mil quince, en el diario TABASCO AL DÍA.**

Lo anterior, en atención a que se ofreció la documental privada consistente en un ejemplar del diario TABASCO AL DIA, correspondiente a la edición 7524, del cinco de mayo, documental que es coincidente con la inspección realizada por la autoridad instructora a la página WEB, [www.tabascoaldia.com.mx](http://www.tabascoaldia.com.mx), del día cinco de mayo de dos mil quince, lo cual, al constar en el acta de treinta y uno de mayo del presente año, y hace prueba plena al tratarse de una documental pública.

El contenido de la nota periodística es el siguiente:

En primera plana:

“Pilar Córdoba  
'Mapache mayor'

Está comprando votos para regalar despensas, machetes, láminas y molinos, denuncia panista \*Pide al INE revisar las cuentas del abanderado priista y aplicarle la ley."

En la página tres:

"Pilar Córdoba 'Mapache'

Está comprando votos regalando despensas, machetes, láminas y molinos denuncia candidata.

L. Sandoval Frade

Acusa la candidata al sexto distrito federal por el Partido Acción Nacional [PAN] Mara Vázquez Yee que su adversario político, el Priísta José del Pilar Córdoba está entregando desde despensas hasta 'recursos económicos a los posibles votantes', al decir que es necesario que el INE verifique y audite las cuentas del petrolero 'pues es evidente que ya rebaso el límite de gastos'.

En rueda de prensa donde fue acompañada de su presidente, el dirigente albiazul Jorge Avalos, la aspirante a esta diputación, destacó que 'se está documentando cada una de las acusaciones, pues este señor junto con todos los trabajadores petroleros que realizan en trabajo, están regalando sobre todo en las zonas de pobreza y rurales, despensas, machetes, láminas, molinos entre otras cuestiones'.

Destacó que 'al estar apoyado de un sindicato en donde la corrupción es algo cotidiano para ello, pues busca a toda costa que el dirigente petrolero sea el ganador, sin importar las formas'.

También destacó que dentro de sus recorridos que ha realizado, 'la gente nos informa que los trabajadores petroleros llegan con camionetas repletas de utensilios, y que nosotros porque no hacemos lo mismo'.

Destacó además que 'los comentarios, es que están ofreciendo hasta cinco mil pesos por familia numerosa para que voten por el priísmo este siete de junio, pero solo para sus aspirantes, y que les dejan libres para votar por presidente municipal en Centro y Jalapa, así como las diputaciones locales, es decir, solo está trabajando para sus aspiraciones'.

Por ello, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que revise las cuentas de José del Pilar Córdoba 'pues es evidente de la forma como entrega playeras, gorras, de todo, y ya rebasó el tope de gastos de campaña'

**RESUELTO ENTREGA DE RECURSOS**

Por otra parte, anunció que se terminó el diferendo con la dirigencia estatal panista sobre la entrega de los recursos para las campañas. 'Nos sentamos a dialogar y ya comenzará a fluir estos dineros'."

De la nota se desprende, respecto del promovente, lo siguiente:

- El encabezado de la nota dice: Pilar Córdoba "mapache mayor".
- La nota la firma L. Sandoval Frade
- Mara Vázquez Yee, candidata del Partido Acción Nacional, acusa al promovente de estar entregando despensas, machetes, láminas, molinos y recursos económicos a los posibles votantes.
- Que la referida candidata considera que el promovente ya rebasó el tope de gastos de campaña, por lo que hace un llamado al INE para que revise 'las cuentas' del promovente.

Es de resaltar que en la audiencia de pruebas y alegatos, la parte señalada aceptó la publicación de las notas descritas en los días señalados.

**En conclusión**, respecto de los hechos materia de la queja, se encuentra acreditada la existencia de las dos notas periodísticas materia de a queja.

#### **Hecho público y notorio.**

Para esta Sala Especializada, es un hecho público y notorio que **José del Pilar Córdoba Hernández**, fue electo diputado local plurinominal en el Congreso del Estado de Tabasco, para el periodo 2012-2015 y es candidato por el PRI, a diputado federal por el distrito 06 del Estado de Tabasco.

#### **4. Análisis de Fondo.**

##### **Difusión de propaganda calumniosa.**

Refiere el promovente, que lo calumnian los encabezados de las notas periodísticas publicadas el uno y cinco de mayo de dos mil quince por el periódico TABASCO AL DÍA, porque con ello se ataca su honorabilidad, honra, fama, dignidad e integridad, y se cae en un “amarillismo periodístico”.

- **Normativa Aplicable.**  
**Marco Constitucional.**

La manifestación de las ideas.

El artículo 6, primer párrafo de la Constitución Federal establece, entre otras cuestiones, que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

El artículo 41, base III, apartado C, primer párrafo de la Constitución Federal indica que en la propaganda política o electoral no deberá haber expresiones que calumnien a las personas, correspondiendo al artículo 471, párrafo segundo, de la Ley Electoral, establecer que se entenderá por calumnia la imputación de **hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral**.

Ahora bien, esta Sala Especializada ha sostenido que la propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales, en el marco de libre manifestación de ideas, **tendrá limitaciones** cuando se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

Asimismo, se estableció como límite a la propaganda política y electoral el uso de expresiones que calumnien a las personas, ya sea en el contexto de

una opinión, información o debate en concordancia con la obligación de respeto a los derechos de terceros.

En este tenor, se ha interpretado a nivel internacional que la finalidad de las normas que regulan la difusión de propaganda de partidos políticos, consiste en el **respeto a la reputación y vida privada de las personas**, reconocidos como derechos fundamentales, en el contexto de una opinión, información o debate, lo que armoniza con la obligación de no vulnerar los derechos de terceros.

Libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.

El artículo 7º constitucional dispone que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, y no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Asimismo, establece que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, la cual no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6º de la propia *Constitución Federal*.

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho fundamental contenido en el artículo 7º de la *Constitución Federal*, en sentido literal, se entiende relativo a la industria editorial, tipográfica o a través de la impresión de documentos. Sin embargo, atendiendo al dinamismo de los medios de comunicación actuales, al empleo de las nuevas

tecnologías, la forma de difusión de la información y su acceso a la sociedad, la libertad de imprenta debe entenderse en un sentido amplio y con carácter funcional.

Así, del contenido armónico de los artículos 6º y 7º constitucionales, la Suprema Corte ha sostenido que la libertad de imprenta es una modalidad de la libertad de expresión, encaminada a garantizar su difusión. La *Constitución Federal* llama a proteger el derecho fundamental a difundir la libre expresión de las ideas de cualquier materia, previéndose de manera destacada la inviolabilidad de este derecho, esto es, que ninguna ley ni autoridad podrán establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta.<sup>2</sup>

La libertad de expresión y prensa se constituyen así en instituciones ligadas de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. Esta dimensión de la libertad de expresión cumple numerosas funciones, entre otras, mantener abiertos los canales para el disenso y el cambio político; se configura como un contrapeso al ejercicio del poder, ya que la opinión pública representa el escrutinio ciudadano a la labor pública; y, finalmente, contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado<sup>3</sup>. Estas consideraciones han sido invocadas por esta *Sala Especializada* al resolver los procedimientos especiales sancionadores **SRE-PSC-13/2015 y SRE-PSC-18/2015**.

---

<sup>2</sup> Tesis: 1a. CCIX/2012 (10a.) LIBERTAD DE IMPRENTA. SU MATERIALIZACIÓN EN SENTIDO AMPLIO EN DIVERSAS FORMAS VISUALES, ES UNA MODALIDAD DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ENCAMINADA A GARANTIZAR SU DIFUSIÓN. Época: Décima Época Registro: 2001674 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional. Página: 509.

<sup>3</sup> Tesis: 1a. CDXIX/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. Época: Décima Época Registro: 2008101 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 05 de diciembre de 2014 10:05 h Materia(s): (Constitucional).



Aunado a lo anterior, cabe recordar que la prensa y su difusión son de vital importancia en la formación de una sociedad más crítica, informada y a su vez, participativa, pues es un conducto idóneo para que la ciudadanía esté en contacto con información de toda clase (cultural, social, política, internacional, deportiva, etcétera), en cualquier momento, y por ende, en la formación de una conciencia sobre la situación que guarda la comunidad de la que forma parte, y más allá de ella.

Por tanto, al cumplir un papel fundamental en la integración de una sociedad democrática, el periodismo<sup>4</sup>, **especialmente aquel que se distribuye por vías escritas** de carácter informativo, ha de suministrar herramientas informativas y cognitivas suficientes para que la ciudadanía se encuentre informada de los hechos relevantes que le pudieran afectar en su vida personal o en general sobre hechos que acontecen en la sociedad que integra, así como en el mundo en el cual se encuentra inserta.

- **Marco Convencional.**

Los artículos 19, párrafo segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13, párrafo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo previsto por los artículos 1º y 133 de la Constitución Federal, reconocen el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla.

---

<sup>4</sup> La *Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas* define como **periodistas** a “Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen”, en este sentido, como se advierte la definición de periodistas integra tanto a las personas físicas que lo ejercen como a cualquier medio de comunicación.

A la luz del artículo 13, párrafo segundo de la citada Convención Americana, se establece que este ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

- a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
- b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

La libertad de expresión se constituye así, en una institución ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. Esta dimensión de la libertad de expresión cumple numerosas funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político; se configura como un contrapeso al ejercicio del poder, ya que **contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado.**<sup>5</sup>

- **Libertad de expresión y crítica a los servidores públicos.**

Asimismo, se ha considerado que la libertad de expresión es un derecho fundamental y “piedra angular” en una sociedad democrática que **permite la crítica hacia los personajes públicos.**

Sin embargo, igualmente se ha asentado que **las figuras públicas, tales como los servidores públicos**, en razón de la naturaleza y de las funciones que realizan, **están sujetas a un tipo diferente de protección** en cuanto a su reputación y honra respecto de las demás personas, por tanto, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Tesis asilada: **LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL.** Décima Época. Primera Sala.

<sup>6</sup> Tesis asilada: **LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES, INFORMACIONES, IDEAS Y OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS.** Décima Época. Primera Sala.

También se ha señalado que existe un claro interés por parte de la sociedad en relación a la función que tienen encomendada **los servidores públicos** a efecto de que sea desempeñada de forma adecuada.<sup>7</sup>

De hecho, se ha adoptado el estándar que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denominado como *Sistema dual de Protección*<sup>8</sup>, en virtud del cual, **los límites a la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas** o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un mayor riguroso control de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección alguna.

Igualmente, la Suprema Corte ha señalado que **la proyección pública se adquiere debido a que la persona de que se trate, su actividad, o el suceso con el cual se le vincula, tenga trascendencia para la comunidad en general, esto es, que pueda justificarse razonablemente el interés que tiene la comunidad en el conocimiento y difusión de la información.**

En esa medida, **las personas con proyección pública deben admitir una disminución en la protección a su vida privada, siempre y cuando la información difundida tenga alguna vinculación con la circunstancia que les da proyección pública o ellos la hayan voluntariamente difundido**<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Tesis aislada: **LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA INJERENCIA EN LA VIDA PRIVADA DE QUIENES PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA CARGOS PÚBLICOS, SE JUSTIFICA POR EL INTERÉS PÚBLICO QUE REVISTEN DICHOS PROCEDIMIENTOS.** Décima Época. Primera Sala.

<sup>8</sup> Página de Internet de la Organización de los Estados americanos: [[http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=610&IID=2#\\_ftn8](http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=610&IID=2#_ftn8)].

<sup>9</sup> Tales argumentos fueron sostenidos por la Suprema Corte en la tesis de rubro: **“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA DEBE ESTAR VINCULADA CON LA CIRCUNSTANCIA QUE LE DA A UNA PERSONA PROYECCIÓN PÚBLICA, PARA PODER SER CONSIDERADA COMO TAL.** Décima Época. Primera Sala.

Asimismo, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha señalado que las expresiones e informaciones atinentes a los **funcionarios públicos**, a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos y a candidatos a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, **están sujetas a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra frente a las demás personas**, y correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica.<sup>10</sup>

No obstante, si la información difundida no versa sobre la actividad desarrollada por la persona en sus negocios o en sus actividades profesionales, ni tiene vinculación alguna con dichos aspectos, no es posible justificar un interés público en la misma.

- **Relación entre libertad de expresión y derechos de la personalidad.**

En cuanto a la relación entre la libertad de expresión y los derechos de la personalidad, como el honor, la Suprema Corte ha señalado que se complica cuando la primera se ejerce para criticar a una persona, de forma tal que ésta se sienta agraviada. La complejidad radica en que el Estado no puede privilegiar un determinado criterio de decencia, estética o decoro respecto a las expresiones que podrían ser bien recibidas, ya que no existen parámetros uniformemente aceptados que puedan delimitar el contenido de estas categorías.

De hecho, **el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto**, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o

---

<sup>10</sup> Tesis aislada: **LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO DE LAS EXPRESIONES, INFORMACIONES, IDEAS Y OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS**. Décima Época. Primera Sala.

indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia.<sup>11</sup>

- **Límites a la libertad de expresión.**

Sin embargo, la Suprema Corte determinó que la prohibición de la censura **no implica que la libertad de expresión no tenga límites** o que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio, además, el artículo 7º Constitucional evidencia con claridad la intención de contener dentro de parámetros estrictos las limitaciones a la libertad de expresión y difusión al establecer que ésta no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.<sup>12</sup>

Además, como incluso lo señala la promovente, se ha sostenido reiteradamente que la libertad de expresión, encuentra sus límites en la noción de calumnia en que se ha indicado que las expresiones o manifestaciones de cualquier tipo que hagan quienes intervienen en la contienda electoral, con el fin primordial de degradar el nombre, estado civil, nacionalidad o la capacidad de sus oponentes, **implica vulneración de derechos de tercero o reputación de los demás**, por apartarse de los principios rectores que ha reconocido el orden constitucional y convencional.<sup>13</sup>

Ha sido criterio que el ámbito de la crítica aceptable debe ampliarse en el curso de los debates políticos, sin considerar como transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, **aporten elementos que permitan la formación**

<sup>11</sup> Tesis de Jurisprudencia: **LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR. EXPRESIONES QUE SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS CONSTITUCIONALMENTE.** Décima Época. Primera Sala.

<sup>12</sup> Jurisprudencia: **LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES.** Novena Época. Pleno.

<sup>13</sup> Lo anterior se sustenta en la tesis de jurisprudencia 14/2007, cuyo rubro es **"HONRA Y REPUTACIÓN. SU TUTELA DURANTE EL DESARROLLO DE UNA CONTIENDA ELECTORAL SE JUSTIFICA POR TRATARSE DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE RECONOCEN EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN."** Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**de una opinión pública libre** y el fomento de una auténtica cultura democrática.

Lo anterior, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, **sin rebasar el derecho a la honra y dignidad de las personas** reconocidos como derechos fundamentales.

- **Libertad de expresión y debate político.**

En lo atinente al **debate político**, el ejercicio de tales prerrogativas **ensancha el margen de tolerancia** frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática.<sup>14</sup>

El máximo órgano de justicia electoral ha privilegiado una interpretación favorecedora de la libertad de expresión, para evitar el riesgo de restringir indebidamente ese derecho fundamental en perjuicio de los candidatos, partidos políticos y de la sociedad en general.

Lo anterior, no significa que la persona o institución objeto de una manifestación que no coincida con la opinión del emisor deba tolerarla, ya que **precisamente en ejercicio de su libertad de expresión puede debatirla**, siendo precisamente el modelo de comunicación que se busca en un estado democrático y reconocido constitucionalmente: el permitir la libre emisión y circulación de ideas.

En tal virtud, sobre los parámetros que deben tomarse en cuenta para resolver en un ejercicio de ponderación aquellos casos en que se encuentre

---

<sup>14</sup> Conforme a la jurisprudencia 11/2008 de rubro "**LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.**" Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

en conflicto la libertad de expresión y el derecho de información, frente al derecho a la intimidad, sea que se trate de personajes públicos o de personas privadas, la Suprema Corte menciona las siguientes<sup>15</sup>:

- Las **personas públicas** o notoriamente conocidas son aquellas que por circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas o bien porque ellas mismas han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra análoga, **tienen proyección o notoriedad en una comunidad** y por ende se someten voluntariamente al riesgo que sus actividades o vida privada sean objeto de mayor difusión.
- Las personas públicas **deben soportar un mayor nivel de injerencia en su intimidad**, a diferencia de las simples particulares, al existir un interés legítimo de la sociedad de recibir información sobre ese personaje.
- Las personas públicas asumen el riesgo que tanto sus actividades como su información personal sea difundida, y por tanto, sujeta a crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta.
- Las personas públicas o privadas se encuentran protegidas constitucionalmente en cuanto a su intimidad y podrán hacer valer su derecho a la misma frente a las opiniones, críticas o informaciones lesivas de aquella.
- Los **funcionarios públicos**, en virtud de la naturaleza pública de sus funciones están sujetas a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra frente a las demás personas, por lo que **deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica**.
- Las **personas con proyección pública** deben admitir una disminución en la protección a su vida privada; es decir, puede atemperarse el manto protector, siempre y cuando la información difundida **tenga alguna vinculación con la circunstancia que le da proyección pública**.

---

<sup>15</sup> Amparo Directo en Revisión 6/2009.

- La solución del conflicto ameritará realizar un ejercicio de ponderación, con un “plus” de protección en cada caso.
- En este ejercicio ponderativo, es el **interés público que tengan los hechos** o datos publicados, el concepto legitimador de las intromisiones en la intimidad; debe ceder **a favor del derecho a comunicar** y recibir información o a **la libertad de expresión cuando tengan relevancia pública**, ya sea por su comportamiento público como aspectos privados que **revistan interés de la comunidad**, al ser el ejercicio de dichos derechos la base de una opinión pública y abierta, en una sociedad democrática.

Asimismo, atendiendo a diversos criterios<sup>16</sup> sustentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la honra, **se puede concluir que la libertad de expresión, dentro del debate político y al referirse a los procesos político-electorales, debe maximizarse.**

En caso de duda sobre qué norma que regule o reconozca derechos humanos deba aplicarse, ya sea de derecho constitucional o del derecho internacional de los derechos humanos incorporada al derecho interno, **debe preferirse aquella que mejor proteja a la persona y que le permita gozar de una mejor manera, su derecho, en una aplicación coherente con los valores y principios que conforman la base de todo ordenamiento jurídico.**

---

<sup>16</sup> Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001; Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006; Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008; Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009; y Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011.



Para determinar si ciertas expresiones se encuentran tuteladas por la libertad de expresión, debe tenerse presente que por su naturaleza, el debate sobre cuestiones públicas debe realizarse de forma vigorosa y abierta, **lo cual incluye expresiones vehementes, cáusticas y en ocasiones desagradables para los funcionarios públicos**, quienes por su posición de representantes de la comunidad deben tolerar la utilización de un lenguaje con expresiones más fuertes que el ciudadano común, especialmente si están relacionadas con sus actividades como gobernante.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la diferencia entre hechos y opiniones. La libertad de expresión no tutela la manifestación de hechos falsos; sin embargo, por su naturaleza propia, **la exigencia de un canon de veracidad no debe requerirse cuando se trate de opiniones**, ni cuando exista una unión inescindible entre éstas y los hechos manifestados que no permitan determinar la frontera entre ellos.<sup>17</sup>

- **Elementos de la calumnia.**

De conformidad con lo señalado en el artículo 471, párrafo segundo, de Ley Electoral se advierte que la calumnia es la imputación a través de propaganda, de:

- Hechos o delitos,
- Que tales hechos o delitos sean falsos, y
- Que se tenga un impacto en un proceso electoral.

---

<sup>17</sup> Criterio orientador establecido en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-192/2010 y 193/2010 acumulados.

De tal forma que se deben hacer imputaciones<sup>18</sup> que se difundan mediante propaganda con afirmaciones categóricas respecto del sujeto pasivo, describiendo o informando que éste ha realizado algún hecho y/o delito.

Las cuestiones que se imputen, además de tratarse de hechos y/o delitos, deben ser falsos, es decir, que o no tuvieron lugar, o habiendo sucedido, no son atribuibles a quien se le imputan.

Por lo que hace al impacto en el proceso electoral, es necesario que tales afirmaciones surtan efecto a través de las diversas etapas del mismo a partir de que la calumnia es realizada.

- **Caso Concreto.**

A juicio de esta Sala Especializada, en la especie, **no se acredita la calumnia**, en atención a lo siguiente:

**Respecto de la nota de uno de mayo de la presente anualidad, cuyo encabezado es: “Pilar Córdoba Terrorista”**, el promovente señala que no es un terrorista, y que tal señalamiento lo calumnia.

Al respecto, como se ha señalado, la nota versa sobre lo que aconteció, a decir de Juan Diego Morales Arias, periodista que firma la nota, respecto de un proceso penal iniciado con motivo de una denuncia presentada por el promovente y otro, en la que se mencionan “explosivos de armas de terroristas”, y que en ese procedimiento, hubo situaciones que impidieron realizar la reconstrucción de hechos en ocho ocasiones, porque, de conformidad con la nota, los delitos “al parecer” son inventados.

---

<sup>18</sup> Imputar es atribuir, establecer que la persona señalada es responsable de ello, por lo que no se trata de un término procesal, de conformidad con el cual, el imputado es quien es sometido a proceso penal (y respecto del cual aún no hay una sentencia).

Como se aprecia, la nota no le atribuye actos de terrorismo al promovente, sino que él presentó una denuncia respecto de hechos que al “parecer” son falsos, en la apreciación del periodista por lo que se “maquillaron” las “demandas” en contra de trabajadores petroleros, generándoles un perjuicio.

Así, se menciona al promovente expresamente como servidor público, es decir, en su calidad de legislador local. Ahora bien, de conformidad con los precedentes nacionales e internacionales citados en el Marco Normativo, hacen evidente que **es una figura pública** por tratarse de un diputado local, que está compitiendo para ser Diputada Federal.

En este sentido, como ha señalado la Suprema Corte en su jurisprudencia, quienes han desempeñado responsabilidades públicas, son figuras públicas<sup>19</sup>, y **en términos de intimidad y respeto al honor cuentan con menos resistencia normativa general** que los ciudadanos ordinarios.

Por lo anterior, los legisladores se someten a un mayor escrutinio de la sociedad, siendo que las personas que influyen en cuestiones de interés público se exponen voluntariamente a un escrutinio público; y por tanto, se debe tener una mayor tolerancia y apertura a la crítica.

Lo anterior, porque la libertad de expresión, dentro del debate político y al referirse a los procesos político-electorales, debe maximizarse<sup>20</sup>.

De esta manera, como se advierte, la nota no le atribuye actos de terrorismo al promovente, y la forma en que encabezan la información que difunden los medios impresos no puede ser dictada ni condicionada por esta autoridad, pues cuentan con libertad e independencia en el ejercicio periodístico.

---

<sup>19</sup> Se consideran como figuras públicas, además de los funcionarios públicos, a los particulares involucrados voluntariamente en asuntos de interés general, es decir, con proyección pública y a candidatos a cargos de elección popular.

<sup>20</sup> Como se señaló en la resolución de los expedientes SRE-PSC-2/2014 y SRE-PSC-44/2015.

La nota utiliza el calificativo de “terrorista”, no porque le atribuya la comisión del delito de terrorismo<sup>21</sup> al promovente, sino porque se trata de una persona que realiza acciones que infunden miedo o terror a las personas, lo que se infiere del contenido de los subencabezados, como se muestra a continuación:

- El hoy candidato del PRI acusó de agitadores a trabajadores y en contubernio con el TSJ maquillaron las demandas.
- Petroleros acusan al poder judicial de proteger a cacique petrolero
- Tienen amenazados a los sindicalizados, si no votan por él.

Así, se trata de presentar la nota con un calificativo que llame la atención, refiriendo que se trata de una persona que infunde terror<sup>22</sup>, pues un terrorista es quien realiza actos de terrorismo y éstos, son actos de dominación por el terror, es decir por el miedo intenso, lo que en el contexto de la nota materia de la queja, no guarda relación con el tipo penal de terrorismo.

En este orden de ideas, el diario está presentando una nota, con un encabezado llamativo, pero una vez que se lee el contenido de los subencabezados, queda claro que no se acusa de delito alguno, sino de infundir miedo intenso a ciertas personas, y el encabezado debe interpretarse con estos elementos en su conjunto, pues como la mayoría de las palabras,

---

<sup>21</sup> El Código Penal federal lo define de la siguiente manera: “**Artículo 139.-** Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.

...”

<sup>22</sup> Terror es definido por el Diccionario de la Lengua Española, editado por ESPASA-CALPE SA, en Madrid, España, como “Miedo muy intenso” y terrorista como “Que practica actos de terrorismo”, mientras que terrorismo, es “Dominación por el terror”.

la de “terrorista” es una expresión ambigua<sup>23</sup>, es decir, tiene varios posibles significados, y el contexto en el que es utilizada permite saber el sentido de la misma en el caso concreto.

Por lo expuesto, al tener varias acepciones la palabra “terrorista”, el sentido en que es utilizada por el periódico en la nota en cuestión, implica la atribución a José del Pilar Córdoba Hernández de ser una persona que puede infundir miedo grave a algunas personas, en la apreciación de quien firma la nota.

De esta manera, en el escrito de queja el promovente no alega que las referencias a la denuncia de hechos y el procedimiento penal del que trata la nota le calumnie, sino que le afecta que se le atribuya el calificativo de terrorista, lo que como se observa no acontece<sup>24</sup>, de tal manera que **el hecho o delito que él dice que le atribuyen, en realidad no es existente**, además de que no indica que lo que desarrolla la nota independientemente del encabezado de la misma sea falso, ni aporta elemento probatorio en dicho sentido.

**Respecto de la nota de cinco de mayo de la presente anualidad, cuyo encabezado es: “Pilar Córdoba ‘mapache’ mayor”**, el promovente señala que tal encabezado ataca su honorabilidad y vulnera sus derechos humanos.

Al respecto, al resolver el SUP-REP-325/2015, la Sala Superior se refiere a la expresión “mapache” del siguiente modo: “*La expresión ‘Mapache’, en*

<sup>23</sup> Se trata de ambigüedad extracontextual, porque el contexto deja claro cuál es el sentido de la palabra. En este sentido, Juan Pablo Alonso, refiere “...una palabra o una oración es ambigua cuando no se puede saber en cual, de entre varios sentidos posibles, se la está usando, distinguiéndose entre ambigüedad extracontextual y ambigüedad contextual...primer tipo...Consideradas aisladamente, no sabemos a cuál de los significados se refieren...”, en *Interpretación de las normas y derecho penal*, editores del Puerto, Argentina, 2004, p. 49 y 50.

<sup>24</sup> En el escrito de queja se refiere que “José del Pilar Córdoba Hernández no es un ‘terrorista’ como lo afirma esa publicación...el que el medio de comunicación denominado ‘Tabasco al Día’ afirme en su primera plana que el candidato José del Pilar Córdoba Hernández es un terrorista es un acto doloso...”

*singular o en plural, forma parte de la jerga o lenguaje coloquial en materia electoral en México, para referirse a personas que realizan actos subrepticios, contrarios a la normativa o a los principios en materia electoral, para obtener triunfos en las urnas.”*

De esta manera, el contenido de la nota periodística, versa sobre las declaraciones que hace quien es identificada por quien firma la nota como candidata del PAN, Mara Vázquez Yee, quien refiere que el promovente se encuentra repartiendo bienes y que en opinión de la candidata ello es una infracción electoral y que, además, probablemente ya rebasó los topes de gastos de campaña.

De esta manera, la nota sólo difunde lo que otra persona refiere y que guarda relación con el proceso electoral y las actividades del candidato, de tal manera que en este caso, también nos encontramos en el supuesto de ejercicio periodístico respecto de hechos que no tienen que ver con el ámbito personal estrictamente privado del promovente, sino que se insertan en la esfera del debate público, toda vez que se trata de información, como ya se ha señalado, relacionada con actos supuestamente realizados en la campaña.

Hay que considerar que, como ya ha sido precisado, en el **debate político**, el ejercicio de la libertad de expresión se **ensancha, aumentando el margen de tolerancia** frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática<sup>25</sup>, para evitar el riesgo de restringir indebidamente ese derecho fundamental en perjuicio de los candidatos, partidos políticos y de la sociedad en general.

---

<sup>25</sup> Conforme a la jurisprudencia 11/2008 de rubro "**LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.**" Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De esta manera, el calificativo de mapache, en el contexto del debate electoral en el cual se enmarca, permite a esta Sala especializada sostener, que la nota periodística sólo es difunde críticas realizadas por otra candidata a las acciones del promovente en la campaña y, respecto de los hechos referidos en la nota, el promovente no hace manifestación alguna respecto a que los mismos sean falsos, ni aporta elemento alguno en ese sentido.

En dicho tenor, es criterio de esta Sala Especializada que el contenido de las notas del procedimiento, se realizaron en apego a la libertad de expresión, debido a que su contenido difunde un cuestionamiento de interés general para la ciudadanía, lo que enriquece el debate público en el contexto de un proceso electoral federal.

Así, debe privilegiarse la libertad de expresión en el contexto del debate político, máxime al tratarse de cuestiones críticas que aportan elementos que permiten la formación de una opinión pública libre y la consolidación de una cultura democrática, razón por la cual se declara la inexistencia de la infracción de calumnia imputada a la parte señalada.

Cabe precisar que, no obstante la anterior conclusión, el promovente tiene a su alcance y se dejan a salvo sus derechos, para el ejercicio de las acciones que juzgue oportunas.

En razón de lo anterior se:

**RESUELVE:**

**ÚNICO.** Se establece la **inexistencia** de las conductas denunciadas atribuidas a Grupo RAMEH (Periódico Tabasco al Día).

**NOTIFÍQUESE**, en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida.

Así lo resolvió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos de los Magistrados que la integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

**MAGISTRADO PRESIDENTE**

**CLICERIO COELLO GARCÉS**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADA**

**FELIPE DE LA MATA PIZAÑA**

**GABRIELA VILLAFUERTE  
COELLO**

**SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS**

**FRANCISCO ALEJANDRO CROKER PÉREZ**